Bogotá D.C., marzo de 2022

**JUZGADO VEINTIUNO (21) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ - SECCIÓN SEGUNDA**

**E. S. D.**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PROCESO: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

**Demandante: BOLIVAR JESUS FREYRE GARCIA**

**Demandando:** **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.**

**Rad. 11001333502120200010600**

**Asunto: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ALEJANDRO BAEZ ATEHORTUA** mayor de edad, con domicilio en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 1.019.038.607 de Bogotá D.C., Abogado Titulado y en ejercicio, titular de la Tarjeta Profesional No. 251.830 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de Apoderado Sustituto de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, de conformidad con el poder a mi conferido, cordialmente solicito al Despacho reconocerme personería para actuar y estando dentro del término de la oportunidad procesal, de manera respetuosa me permito dar **contestación a la demanda** propuesta dentro del proceso de la referencia por el señor **BOLIVAR JESUS FREYRE GARCIA**, contra mi representada judicial, para que mediante Sentencia que haga tránsito a Cosa Juzgada se ABSUELVA a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES de todas y cada una de las pretensiones formuladas en el libelo demandatorio.

**NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD DEMANDADA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO**

La Administradora Colombiana de Pensiones ­ COLPENSIONES, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como Entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio del Trabajo, para que ejerza las funciones señaladas en el Decreto 309 del 24 de febrero de 2017 y en las disposiciones legales vigentes, con la finalidad de otorgar los derechos y beneficios establecidos por el sistema general de seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia.

De conformidad con el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007, la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, hace parte del Sistema General de Pensiones y tiene por objeto la administración estatal del Régimen de Prima Media con Prestación Definida y la administración del Sistema de Ahorro de Beneficios Económicos Periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005 y las demás prestaciones especiales que determine la Constitución y la Ley, en su calidad de Entidad financiera de carácter especial.

La representación legal la ejerce el Doctor JUAN MIGUEL VILLA LORA, identificado con la cédula de ciudadanía número 12435765, o quien haga sus veces.

El domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 10 No. 72-33 Torre B piso 11, No. Telefónico: 217-0100.

**SOBRE LOS HECHOS**

Los hechos fundamento de las pretensiones de la demanda, los contestos de la siguiente manera:

1. **ES CIERTO**, conforme a la documentación que obra en el proceso, y el documento de identidad del señor BOLIVAR JESUS FREYRE GARCIA.
2. **ES CIERTO,** conforme a la documentación que obra en el proceso, el señor FREYRE GARCIA ingreso al departamento Administrativo de Seguridad DAS entre el 3 de febrero de 1992.
3. **ES CIERTO,** conforme a la documentación que obra en el proceso, y la certificación expedida por departamento Administrativo de Seguridad DAS.
4. **NO ME CONSTA,** por lo que respecto a este hecho me atengo a lo que resulte probado en el proceso.
5. **ES CIERTO,** conforme a la documentación que obra en el proceso y la historia laboral del demandante.
6. **ES CIERTO,** conforme a la documentación que obra en el proceso y la historia laboral del demandante, el señor BOLIVAR DE JESUS FREYRE GARCIA, cumplió 18 años de servicio continuos para el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, el 3 de marzo de 2010.
7. **ES CIERTO,** conforme a la documentación que obra en el proceso, y el documento de identidad del señor BOLIVAR JESUS FREYRE GARCIA.
8. **NO ES CIERTO**, ya que el señor BOLIVAR DE JESUS FREYRE GARCIA, no cumple con los requisitos de número mínimo de semanas establecido normativamente, teniendo en cuenta la edad del demandante que requería como mínimo 1.600 semanas cotizadas de las cuales 950 fueran de cotización especial y es preciso aclarar que dentro de la historia laboral tan solo se evidencian 1.315 semanas de cotización de las cuales 297 fueron de cotización especial.
9. **ES CIERTO**, conforme a la documentación que obra en el proceso y la historia laboral del señor FREYRE GARCIA.
10. **NO ES CIERTO**, ya que este cargo se ejerce en entidades totalmente diferentes y son cargos que no tiene relación, sin embargo, es preciso tener en cuenta que Colpensiones desconoce las funciones desempeñadas por el señor BOLIVAR DE JESUS FREYRE GARCIA, en la Fiscalía General de la Nación**.**
11. **NO ES CIERTO**, ya que el demandante solo acredito 297 semanas cotizadas en actividades de alto riesgo, esto en razón a que el señor BOLIVAR DE JESUS FREYRE GARCIAL desempeño actividades de alto riesgo, en funciones de Policía Judicial en la Fiscalía General de la Nación desde el 1 de enero de 2012, en el cargo de FUNCIONES INVESTIGADOR CRIMINALISTICO II, HOMOLOGADO A TÉCNICO INVESTIGADOR, por lo que no cumplió el requisito del tiempo cotizado para el reconocimiento de una pensión por actividades de alto riesgo.
12. **NO ES CIERTO**, ya que el demandante no cumplió con el requisito de semanas cotizadas en actividades de alto riesgo, conforme a la documentación que obra en el expediente, se logró determinar que el demandante laboró para el DAS en el cargo de DETECTIVE desde el 15 de septiembre de 1992 al 31 de diciembre de 2011, equivalente a 19 años, 2 meses y 20 días, motivo por el cual se pudo determinar que no acreditaba los 20 años de servicios exclusivos con el DAS bajo el cargo de Detective, de ahí que no es procedente reconocer la prestación bajo los postulados del Decreto 1047 de 1978.
13. **ES CIERTO,** el señor BOLIVAR JESUS FREYRE GARCIA, el día 2 de mayo de 2017 solicito ante la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, el reconocimiento de una pensión de vejez por actividades de alto riesgo.
14. **ES CIERTO,** conforme a la documentación que obra en el expediente, mediante resolución SUB 276804 del 30 de noviembre de 2017, fue resuelta la solicitud realizada por la parte demandante, teniendo en cuenta argumentos legales, jurisprudenciales y doctrinarios, aplicables a este caso en particular.
15. **NO ES UN HECHO,** es una afirmación subjetiva del apoderado de la parte demandante que busca favorecer sus pretensiones, aunado a lo anterior, es preciso tener en cuenta que la resolución SUB 276804 del 30 de noviembre de 2017, fue expedida conforme a derecho se encuentra motivada conforme a la legislación aplicable a este caso en particular, y presentando argumento jurisprudenciales y doctrinales.
16. **NO ES UN HECHO,** es una afirmación subjetiva del apoderado de la parte demandante que busca favorecer sus pretensiones, aunado a lo anterior, es preciso tener en cuenta que la resolución SUB 276804 del 30 de noviembre de 2017, fue expedida conforme a derecho se encuentra motivada conforme a la legislación aplicable a este caso en particular, y presentando argumento jurisprudenciales y doctrinales.

**13**. (Como aparece en la demanda). **NO ES UN HECHO**, es una apreciación subjetiva del apoderado de la parte que busca favorecer las pretensiones de la demanda, sin embargo, es preciso tener en cuenta que las resoluciones expedidas por Colpensiones, en este caso en particular la resolución No. SUB 276804 del 30 de noviembre de 2017, se expiden conforme a derecho, motivadas conforme a la legislación vigente, jurisprudencia aplicable al caso en particular y doctrina vinculante.

**14**. (Como aparece en la demanda). **ES CIERTO,** conforme a la documentación que obra en el proceso y el recurso presentado por la parte demandante.

**15**. (Como aparece en la demanda). **ES CIERTO,** conforme a la documentación que obra en el proceso, mediante resolución No. SUB 211964 del 29 de septiembre de 2017, Colpensiones resolvió el recurso de reposición presentado por la parte demandante.

**16**. (Como aparece en la demanda). **ES CIERTO,** conforme a la documentación que obra en el proceso, mediante resolución No. DIR 17889 del 13 de octubre de 2017, Colpensiones resolvió el recurso de apelación presentado por la parte demandante.

**17**. (Como aparece en la demanda). **NO ES CIERTO,** esta resulta ser una afirmación temeraria del apoderado de la parte demandante, es preciso tener en cuenta que La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, actúa conforme a derecho expidiendo los Actos Administrativos conforme a la Ley y la Jurisprudencia, realizando una actuación administrativa apegada a la ley.

**18.** (Como aparece en la demanda). **NO ES CIERTO,** ya que el demandante solo acredito 297 semanas cotizadas en actividades de alto riesgo, esto en razón a que el señor BOLIVAR DE JESUS FREYRE GARCIAL desempeño actividades de alto riesgo, en funciones de Policía Judicial en la Fiscalía General de la Nación desde el 1 de enero de 2012, en el cargo de FUNCIONES INVESTIGADOR CRIMINALISTICO II, HOMOLOGADO A TÉCNICO INVESTIGADOR, por lo que no cumplió el requisito del tiempo cotizado para el reconocimiento de una pensión por actividades de alto riesgo.

**19**. (Como aparece en la demanda). **NO ES UN HECHO, e**s una afirmación subjetiva del apoderado de la parte demandante.

**20**. (Como aparece en la demanda). **ES CIERTO**, a la legislación aplicable para el reconocimiento de pensiones por actividades de alto riesgo de funcionarios que trabajaron para el DAS el el Decreto 1047 de 1978.

**21**. (Como aparece en la demanda). **NO ES UN HECHO, e**s una afirmación subjetiva del apoderado de la parte demandante, quien está realizando un análisis normativo que debe probar en el trascurso del proceso.

**22**. (Como aparece en la demanda). **NO ES UN HECHO, e**s una afirmación subjetiva del apoderado de la parte demandante, quien está realizando un análisis normativo que debe probar en el trascurso del proceso.

**23**. (Como aparece en la demanda). **NO ES CIERTO,** ya que en la historia laboral del demandante registra un total de 1.315 semanas laboradas.

**24.** (Como aparece en la demanda). **NO ES UN HECHO, e**s una afirmación subjetiva del apoderado de la parte demandante, quien está realizando un análisis normativo que debe probar en el trascurso del proceso.

**24.** (Como aparece en la demanda). **NO ES UN HECHO, e**s una afirmación subjetiva del apoderado de la parte demandante, quien está realizando un análisis jurisprudencial de una sentencia del H. Consejo de Estado.

**SOBRE LAS PRETENSIONES**

***A la pretensión 1***: Me opongo a esta pretensión como quiera que no es procedente declarar la nulidad de la resolución No. SUB 107164 del 27 de junio de 2017, ya que ya que la misma fue expedida conforme a derecho en la que se resolvió negar el reconocimiento de una pensión de vejez por actividades de alto riesgo al señor **FREYRE GARCIA BOLIVAR JESUS**, teniendo en cuenta que el demandante no cumple con los requisitos mínimos exigidos en la Ley 860 de 2003, pues tiene una edad de 50 años, lo que quiere decir que requiere de 1600 semanas de cotización de las cuales por lo menos 950 sean de cotización especial, y el demandante acredita solamente 1.315 semanas de cotización ordinaria, no cumpliendo con el requisito establecido en la norma.

Aunado a lo anterior conforme a la documentación que obra en el expediente, se logro determinar que el asegurado laboro para el DAS en el cargo de DETECTIVE desde el 15 de septiembre de 1992 al 31 de diciembre de 2011, equivalente a 19 años, 2 meses y 20 días, motivo por el cual se pudo determinar que no acreditaba los 20 años de servicios exclusivos con el DAS bajo el cargo de DETECTIVE, de ahí que no es procedente aplicar y reconocer el derecho bajo los postulados del Decreto 1047 de 1978.

Ahora bien en lo que respecta a acreditar 16 años de servicios y 50 años de edad resulta pertinente aclarar que si bien el demandante acreditó 16 años de servicios por el periodo comprendido desde el 15 de septiembre de 1992 y el 31 de diciembre de 2011, para el DAS en el cargo de DETECTIVE, al 31 de diciembre de 2011, el demandante contaba con 44 años de edad, por lo tanto no acreditaba el requisito de edad establecido, por lo que no era procedente el reconocimiento de la prestación conforme ala Decreto 1047 de 1978.

***A la pretensión 2***: Me opongo a esta pretensión como quiera que no es procedente declarar la nulidad de la resolución No. SUB 211964 del 29 de septiembre de 2017, ya que ya que la misma fue expedida conforme a derecho en la que se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la parte demandante, realizando un estudio normativo aplicable a este caso en particular, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 806 de 2003 y el Decreto 1047 de 1978, concluyendo que el demandante, no cumplía con los requisitos establecido para ser beneficiario de una pensión de vejez por actividades de alto riesgo.

***A la pretensión 3***: Me opongo a esta pretensión como quiera que no es procedente declarar la nulidad de la resolución No. DIR 17889 del 13 de octubre de 2017, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte demandante ya que ya que la misma fue expedida conforme a derecho en la que se resolvió negar el reconocimiento de una pensión de vejez por actividades de alto riesgo al señor **FREYRE GARCIA BOLIVAR JESUS**, teniendo en cuenta que el demandante no cumple con los requisitos mínimos exigidos en la Ley 860 de 2003, pues tiene una edad de 50 años, lo que quiere decir que requiere de 1600 semanas de cotización de las cuales por lo menos 950 sean de cotización especial, y el demandante acredita solamente 1.315 semanas de cotización ordinaria, no cumpliendo con el requisito establecido en la norma.

Aunado a lo anterior conforme a la documentación que obra en el expediente, se logró determinar que el asegurado laboro para el DAS en el cargo de DETECTIVE desde el 15 de septiembre de 1992 al 31 de diciembre de 2011, equivalente a 19 años, 2 meses y 20 días, motivo por el cual se pudo determinar que no acreditaba los 20 años de servicios exclusivos con el DAS bajo el cargo de DETECTIVE, de ahí que no es procedente aplicar y reconocer el derecho bajo los postulados del Decreto 1047 de 1978.

Ahora bien en lo que respecta a acreditar 16 años de servicios y 50 años de edad resulta pertinente aclarar que si bien el demandante acreditó 16 años de servicios por el periodo comprendido desde el 15 de septiembre de 1992 y el 31 de diciembre de 2011, para el DAS en el cargo de DETECTIVE, al 31 de diciembre de 2011, el demandante contaba con 44 años de edad, por lo tanto no acreditaba el requisito de edad establecido, por lo que no era procedente el reconocimiento de la prestación conforme ala Decreto 1047 de 1978.

***A la pretensión 4***: Me opongo a esta pretensión como quiera que no es procedente declarar que el señor **FREYRE GARCIA BOLIVAR JESUS**, tiene derecho a que mi representada le reconozca y pague una pensión de vejez por actividades de alto riesgo esto en razón a que no cumplió con los requisitos mínimos de tiempo cotizado en actividades de alto riesgo, es preciso tene en cuenta que conforme al expediente administrativo se logró determinar que el asegurado laboro para el DAS en el cargo de DETECTIVE desde el 15 de septiembre de 1992 al 31 de diciembre de 2011, equivalente a 19 años, 2 meses y 20 días, motivo por el cual se pudo determinar que no acreditaba los 20 años de servicios exclusivos con el DAS bajo el cargo de DETECTIVE, de ahí que no es procedente aplicar y reconocer el derecho bajo los postulados del Decreto 1047 de 1978, además no cumple con los requisitos mínimos exigidos en la Ley 860 de 2003, pues tiene una edad de 50 años, lo que quiere decir que requiere de 1600 semanas de cotización de las cuales por lo menos 950 sean de cotización especial, y el demandante acredita solamente 1.315 semanas de cotización ordinaria, no cumpliendo con el requisito establecido en la norma.

.

***A la pretensión 5***: Me opongo a que prospere la pretensión dirigida a obtener el pago por concepto de retroactivo, ello en atención a que en primer lugar el demandante no es beneficiario de una pensión de vejez por actividad de alto riesgo reconocida por la Administradora Colombiana de Pensiones, ya que no cumple con los requisitos establecidos en la Ley por lo que mi representada no debe suma alguna ni se debe reconocer suma alguna por ningún concepto. Adicional a ello, me opongo a la pretensión dirigida a obtener la indexación de sumas, teniendo en cuenta que lo que respecta a este tema en concreto, debe decirse que la asegurada disfruta de una pensión la cual ha sido actualizada conforme al Artículo 14 de la ley 100 de 1993 y el artículo 41 del Decreto 692 de 1994 así:

*“ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno [16]”.*

Lo anterior fue recogido por el artículo 41 del Decreto 692 de 1994, cuyo tenor es el siguiente:

*“Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en el sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el 1 de enero de cada año, según la*

*variación porcentual del índice de precios al consumidor, total nacional, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.*

*No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno, cuando dicho reajuste resulte superior al de la variación del IPC previsto en el inciso anterior."*

Conforme a lo anterior esta administradora ha indexado la mesada pensional el asegurado conforme a lo prescrito en las normas anteriores. Al respecto La Corte Constitucional mediante sentencia Sentencia T-020/11 señaló:

*“Este precepto legal precisa entonces el alcance del derecho constitucional al reajuste de las mesadas de las pensiones, pues por una parte establece cuales pensiones deben ser reajustadas: todas las modalidades en cualquiera de los dos regímenes del sistema; también define la periodicidad del aumento, el cual debe hacerse anualmente, el primero de enero de cada año y de manera oficiosa; y finalmente precisa cual es el parámetro que debe ser tenido en cuenta para el reajuste: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior”*.

Esta disposición a su vez estableció una regla especial para el aumento de las pensiones iguales a un salario mínimo mensual pues determinó que en este caso serían reajustadas en el mismo porcentaje en que se incremente el salario mínimo, mandato legal que fue objeto de una declaratoria de exequibilidad condicionada mediante la sentencia C-387 de 1994, en el entendido que si el IPC fuere superior al incremento del salario mínimo legal estas pensiones en todo caso deberían incrementarse de conformidad al primero.

Teniendo en cuenta que no es posible acceder a las pretensiones del recurrente respecto de la Indexación por lo expuesto anteriormente.

***A la pretensión 6:***  Me opongo a esta pretensión como quiera que no es procedente condena alguna respecto a indexación, o pago respecto a diferencias adeudadas, toda vez que la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES negó el reconocimiento de la pensión de vejez por actividad de alto riesgo, ya que el demandante no cumple con los requisitos establecidos en la ley. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que La Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, al momento de efectuar los correspondientes pagos, procede a reconocer y cancelar todas las prestaciones de manera indexada, motivo por el cual resulta a todas luces improcedente e innecesaria tal pretensión.

Al respecto, se tiene que el Consejo de Estado mediante sentencia del 08 de noviembre de 1.995 (Sección Segunda) Magistrado Ponente Dr. JOAQUIN BARRETO RUIZ, afirmó:

*“La corporación ha accedido ya en varias oportunidades a decretar el ajuste de valor cuando lo reclamado por los demandantes ha sido una suma fija que ha quedado congelada en el tiempo... El ajuste de valor o indexación de las condenas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a diferencia de lo que acontece por ejemplo dentro de la jurisdicción laboral ordinaria que carece de una norma legal que faculte expresamente al juez para decretarlo, si tiene una norma que le da sustento legal a una decisión de esta naturaleza, cual es el artículo 178 del C.C.A que autoriza al juez administrativo para decretar el ajuste, tomando como base el Índice de precios al consumidor, o al por mayor de manera que ésta norma despeja cualquier duda que pudiera surgirle al juez Administrativo en relación con la fuente legal que le sirva de sustento a una decisión de esa naturaleza".*

Igualmente, en sentencia de fecha 8 de agosto de 1.996 (sala de Consulta y Servicio Civil) Magistrado Ponente: LUIS CAMILO OSORIO ISAZA, el Honorable Consejo de Estado afirmó:

*"(…) existe en materia contenciosa administrativa el artículo 178 del C.C.A., aplicable a las prestaciones laborales no canceladas oportunamente, que prevé derecho de acudir al cobro judicial, pero no tiene facultad la administración, para autorizar pagos por este concepto, su reconocimiento es competencia propia de la jurisdicción contenciosa administrativa."*

De lo anterior, el artículo 178 del C.C.A. faculta al juez administrativo para establecer el ajuste monetario de aquellas sumas fijas reconocidas, que no tengan ninguna posibilidad de actualización de su valor, empero la administración de manera oficiosa no está facultada por norma legal alguna para actualizar el valor monetario de las obligaciones a su cargo estando obligada eso si a dar cumplimiento a las decisiones judiciales por imperativo legal.

Así mismo, respecto a la indexación pensional es necesario indicar que el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 dispone:

***"ART. 14: Reajustes de Pensiones****. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año según la variación porcentual del índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. NO obstante, las pensiones cuyo monto mensual*

*sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno"*

De lo anterior se desprende que COLPENSIONES al momento de efectuar los correspondientes pagos de prestaciones, procede a indexar los valores a pagar, conforme la ley lo ordena, motivo por el cual resulta improcedente e innecesaria tal condena.

No se deben indexar las obligaciones cuyo nacimiento se sujeta a un acontecimiento futuro e incierto, como quiera que no debe ser objeto de indexación, los derechos eventuales, incompletos e imperfectos.

***Condenas:***

***A la pretensión 1*** : Me opongo a esta pretensión como quiera que no es procedente condena alguna respecto a indexación, toda vez que La Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, al momento de efectuar los correspondientes pagos, procede a reconocer y cancelar todas las prestaciones de manera indexada, motivo por el cual resulta a todas luces improcedente e innecesaria tal pretensión.

Al respecto, se tiene que el Consejo de Estado mediante sentencia del 08 de noviembre de 1.995 (Sección Segunda) Magistrado Ponente Dr. JOAQUIN BARRETO RUIZ, afirmó:

*“La corporación ha accedido ya en varias oportunidades a decretar el ajuste de valor cuando lo reclamado por los demandantes ha sido una suma fija que ha quedado congelada en el tiempo... El ajuste de valor o indexación de las condenas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a diferencia de lo que acontece por ejemplo dentro de la jurisdicción laboral ordinaria que carece de una norma legal que faculte expresamente al juez para decretarlo, si tiene una norma que le da sustento legal a una decisión de esta naturaleza, cual es el artículo 178 del C.C.A que autoriza al juez administrativo para decretar el ajuste, tomando como base el Índice de precios al consumidor, o al por mayor de manera que ésta norma despeja cualquier duda que pudiera surgirle al juez Administrativo en relación con la fuente legal que le sirva de sustento a una decisión de esa naturaleza".*

Igualmente, en sentencia de fecha 8 de agosto de 1.996 (sala de Consulta y Servicio Civil) Magistrado Ponente: LUIS CAMILO OSORIO ISAZA, el Honorable Consejo de Estado afirmó:

*"(…) existe en materia contenciosa administrativa el artículo 178 del C.C.A., aplicable a las prestaciones laborales no canceladas oportunamente, que prevé derecho de acudir al cobro judicial, pero no tiene facultad la administración, para autorizar pagos por este concepto, su reconocimiento es competencia propia de la jurisdicción contenciosa administrativa."*

De lo anterior, el artículo 178 del C.C.A. faculta al juez administrativo para establecer el ajuste monetario de aquellas sumas fijas reconocidas, que no tengan ninguna posibilidad de actualización de su valor, empero la administración de manera oficiosa no está facultada por norma legal alguna para actualizar el valor monetario de las obligaciones a su cargo estando obligada eso si a dar cumplimiento a las decisiones judiciales por imperativo legal.

Así mismo, respecto a la indexación pensional es necesario indicar que el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 dispone:

***"ART. 14: Reajustes de Pensiones****. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año según la variación porcentual del índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. NO obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno"*

De lo anterior se desprende que COLPENSIONES al momento de efectuar los correspondientes pagos de prestaciones, procede a indexar los valores a pagar, conforme la ley lo ordena, motivo por el cual resulta improcedente e innecesaria tal condena.

No se deben indexar las obligaciones cuyo nacimiento se sujeta a un acontecimiento futuro e incierto, como quiera que no debe ser objeto de indexación, los derechos eventuales, incompletos e imperfectos.

***A la pretensión 2*** : Me opongo a esta pretensión como quiera que no es procedente condena alguna respecto diferencias adeudadas o ajustes de valor conforme al IPC en razón a que el demandante no es beneficiario de ninguna prestación reconocida por parte de La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. Aunado a lo anterior es preciso tener en cuenta que La Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, al momento de efectuar pagos, procede a reconocer y cancelar todas las prestaciones de manera indexada, motivo por el cual resulta a todas luces improcedente e innecesaria tal pretensión.

Al respecto, se tiene que el Consejo de Estado mediante sentencia del 08 de noviembre de 1.995 (Sección Segunda) Magistrado Ponente Dr. JOAQUIN BARRETO RUIZ, afirmó:

*“La corporación ha accedido ya en varias oportunidades a decretar el ajuste de valor cuando lo reclamado por los demandantes ha sido una suma fija que ha quedado congelada en el tiempo... El ajuste de valor o indexación de las condenas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a diferencia de lo que acontece por ejemplo dentro de la jurisdicción laboral ordinaria que carece de una norma legal que faculte expresamente al juez para decretarlo, si tiene una norma que le da sustento legal a una decisión de esta naturaleza, cual es el artículo 178 del C.C.A que autoriza al juez administrativo para decretar el ajuste, tomando como base el Índice de precios al consumidor, o al por mayor de manera que ésta norma despeja cualquier duda que pudiera surgirle al juez Administrativo en relación con la fuente legal que le sirva de sustento a una decisión de esa naturaleza".*

Igualmente, en sentencia de fecha 8 de agosto de 1.996 (sala de Consulta y Servicio Civil) Magistrado Ponente: LUIS CAMILO OSORIO ISAZA, el Honorable Consejo de Estado afirmó:

*"(…) existe en materia contenciosa administrativa el artículo 178 del C.C.A., aplicable a las prestaciones laborales no canceladas oportunamente, que prevé derecho de acudir al cobro judicial, pero no tiene facultad la administración, para autorizar pagos por este concepto, su reconocimiento es competencia propia de la jurisdicción contenciosa administrativa."*

De lo anterior, el artículo 178 del C.C.A. faculta al juez administrativo para establecer el ajuste monetario de aquellas sumas fijas reconocidas, que no tengan ninguna posibilidad de actualización de su valor, empero la administración de manera oficiosa no está facultada por norma legal alguna para actualizar el valor monetario de las obligaciones a su cargo estando obligada eso si a dar cumplimiento a las decisiones judiciales por imperativo legal.

Así mismo, respecto a la indexación pensional es necesario indicar que el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 dispone:

***"ART. 14: Reajustes de Pensiones****. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año según la variación porcentual del índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. NO obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno"*

De lo anterior se desprende que COLPENSIONES al momento de efectuar los correspondientes pagos de prestaciones, procede a indexar los valores a pagar, conforme la ley lo ordena, motivo por el cual resulta improcedente e innecesaria tal condena.

No se deben indexar las obligaciones cuyo nacimiento se sujeta a un acontecimiento futuro e incierto, como quiera que no debe ser objeto de indexación, los derechos eventuales, incompletos e imperfectos.

***A la pretensión 4:***: Me opongo a esta pretensión dirigida a obtener el pago de intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, teniendo en cuenta lo siguiente:

“ARTÍCULO 141. INTERESES DE MORA. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago.”

Es importante resaltar que los mismos no proceden dado que no ha operado por parte de la entidad un retraso injustificado para el pago de la prestación económica.

De lo anterior se puede establecer que para que proceda el pago de los intereses moratorios, es menester que concurran dos requisitos a saber; el primero que exista una pensión legalmente reconocida y el segundo que la administradora encargada de efectuar el pago haya incurrido en mora injustificada en el pago de la mesada pensional. Al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-281/11 dispuso: " El mínimo vital de los pensionados no sólo resulta vulnerado por la falta de pago de las mesadas pensionales sino, también, por el retraso injustificado en la cancelación de las mismas".

Se puede concluir entonces, que por mandato legal, es procedente el reconocimiento y pago de los intereses moratorios que se han causado cuando existe mora o retardo en el pago de las respectivas mesadas pensiónales ya reconocidas, de lo que se infiere que proceden los aludidos intereses, única y exclusivamente, a partir de la fecha en que ha sido expedido el acto administrativo mediante el cual se ordena el reconocimiento y pago de las prestaciones, obviamente en el evento en que no se cumpla lo ordenado en el mismo, situación que evidentemente no es la de la accionante.

Lo anterior tiene un total soporte jurídico dado que es imposible para la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, en representación de las arcas económicas del Estado, el reconocimiento de intereses de cualquier tipo ya que de hacerlo estaría actuando en total contravía con el acto legislativo 01 de 2005 y los principios de UNIVERSALIDAD, SOLIDARIDAD, SOSTENIBILIDAD PRESUPUESTAL Y DE LEGALIDAD, los cuales permean el campo de la seguridad social en Colombia.

***A la pretensión 5:*** Me opongo a que prospere la pretensión condenatoria de condena en costas y agencias en derecho, toda vez que el Consejo de Estado,[[1]](#footnote-1) en la Subsección A de la Sección Segunda, adoptó una postura frente a este asunto ordenando que ellas se deben generar luego de efectuar un análisis *objetivo valorativo*, en ese sentido dispuso:

el concepto de costas incluye las agencias del derecho que corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, **que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los criterios sentados en los numerales 3° y 4º del artículo 366 del CGP9 , y que no necesariamente deben corresponder al mismo monto de los honorarios pagados por dicha parte a su abogado** los cuales deberán ser fijados contractualmente entre éstos conforme los criterios previstos en el artículo 28 numeral 8.º de la ley 1123 de 2007.

Ahora bien, a raíz de la expedición del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en anteriores oportunidades y en materia de condena en costas, la Subsección A sostuvo que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no implicaba la condena de manera “automática” u “objetiva”, frente a aquel que resultara vencido en el litigio. Ello, en consideración a que debían observarse una serie de factores, tales como la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas

en el proceso sobre los gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el que el juez

evaluara las circunstancias para imponerla, o no12. Sin embargo, en esta oportunidad la Subsección A varía aquella posición y acoge el criterio objetivo para la imposición de costas (incluidas las agencias en derecho) al concluir que no se debe evaluar la conducta de las partes (temeridad o mala fe).

**Se deben valorar aspectos objetivos** respecto de la causación de las costas, tal como lo prevé el Código General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación a su artículo 365. Las razones son las siguientes:

[…]

El análisis anterior permite las siguientes conclusiones básicas sobre las costas:

1. **El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio “subjetivo” –CCA a uno “objetivo valorativo” –CPACA-.**
2. Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
3. **Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente**

**realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.**

1. La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
2. de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
3. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
4. La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
5. Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

De lo anterior se avizora, que no basta con que una de las partes solicite la condena en costas, sino que debe sustentar su generación, pues la nueva postura de la del Honorable Consejo de Estado - Sección Segunda, cuya jurisprudencia es vinculante, a más de ser objetiva, es valorativa y exige la causación y respectiva prueba de las costas exigidas para que el operador de justicia pueda proceder a imponer la respectiva condena.

En razón a que la relación entre el abogado representante y la parte representada no se puede presumir como laboral por el simple acto de la representación, es necesario que por lo menos se anexe al expediente copia del contrato de prestación de servicios o el acuerdo de contraprestación al que hayan llegado las partes, para que así el juez derive una verdadera generación de agencias en derecho que concluya con una posible condena en costas.

**FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO**

En el presente caso, el demandante señor FREYRE GARCIA BOLIVAR JESUS, pretende que la Administradora Colombiana de Pensiones le reconozca y pague una pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo a partir del 2 de mayo de 2017, fecha en que cumplió el status de pensionado, junto con el pago de retroactivo. Así mismo determinar si procede la inclusión del factor salarial denominado prima de riesgo.

No obstante, lo anterior, las súplicas invocadas en la demanda no tienen vocación de prosperidad, esto con base en las siguientes consideraciones:

Para empezar, debemos resaltar que mediante resolución SUB 107164 del 27 de junio de 2017, la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-, negó el reconocimiento y pago de una pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo y el reconocimiento y pago de una pensión de vejez ordinaria al hoy accionante, por no acreditar los requisitos legales dispuestos en el decreto 1047 de 1978 ni en la ley 797 de 2003.

Posteriormente a través de los actos administrativos SUB 21196 del 29 de septiembre de 2017 y DIR 17889 del 13 de octubre de 2017, se negó el reconocimiento de la pensión especial de vejez por actividades del alto riesgo, por no cumplir los requisitos legales para acceder al derecho invocado.

Ahora bien, el accionante acreditó un total de 9.208 días laborados, correspondientes a 1,315 semanas; así misma cuenta en la actualidad con 55 años de edad.

Para el presente caso debemos indicar que circular conjunta No. 9 del 28 de diciembre de 2016 proferida por la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de esta Subdirección, señaló que:

*“…Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto y el hecho de que la Administradora Colombiana de Pensiones, en su calidad de administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida únicamente se encuentra facultada para realizar una labor de valoración de las pruebas documentales que se allegan al expediente pensional y con base en ellas determinar el cumplimiento de los requisitos dispuestos por el legislador y la jurisprudencia para que proceda el reconocimiento de las prestaciones económicas creadas por el Sistema General de Pensiones, el responsable de examinar, conocer, controlar y supervisar las condiciones en las cuales los trabajadores desempeñan sus actividades laborales es el empleador y de esas funciones deviene necesariamente la administración de la información requerida para certificar el desempeño de actividades de alto riesgo por parte de los afiliados al sistema .”*

Debemos resaltar que obra Certificación emitida por el Grupo de Gestión Humana del Archivo General de la Nación de fecha 29 de mayo de 2012 a favor del hoy demandante indicando lo siguiente:

“(..)

Que el señor BOLIVAR JESUS FREYRE GARCIA, identificado con c.c No. 12.989.707 de pasto, ingreso al Departamento Administrativo de Seguridad el 3 de febrero de 1992 al cargo de Alumno de Academia Grado 03 de la Planta Administrativa Asignada a la Academia Superior de Inteligencia y Seguridad Pública, curso 076 según Res. 4659192

Quen en cumplimiento al Decreto 4057 del 31 de octubre de 2011, por el cual se suprimió el Departamento Administrativo de Seguridad DAS se readignaron unas funciones y se dictaron otras disposiciones el señor BOLIVAR JESUS FREYRE GARCIA desempeño el cargo de detective profesional 2 07-09 dependiente del Grupo de Operativo – Seccional Nariño, hasta el 31 de diciembre de 2011.”

Así mismo, obra en el expediente certificación expedida por la Fiscalía General de la Nación de fecha 23 de marzo de 2017 en la cual se determina lo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **CARGO DESEMPEÑADO** | **DESDE** |
| INVESTIGADOR II | 2012-01-01 |
| TECNICO INVESTIGADOR II | 2014-01.01 |

Teniendo en cuenta lo anterior, debemos resaltar lo establecido en el artículo 2 de la Ley 860 de 2003, el régimen de pensiones para el personal del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, al que se refieren los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994 o normas que lo modifiquen o adicionen, será el que a continuación se define:

“… 1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad. 2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones al que se refiere el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá un (1) año por cada sesenta (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años”.

Así mismo, la circular 15 de 2015 de la esta entidad indica las reglas para el reconocimiento de la pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo en el DAS, sobre lo cual dispone:

*IV. REGLAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ POR*

*ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO - SITUACIONES PARTICULARES.*

*A. DAS*

*La Ley 860 de 2003 (diciembre 26) a través de la cual se reformaron algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 se dictaron otras disposiciones, dispuso frente al régimen pensional del personal del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, lo siguiente:*

*1. Personal que desempeña actividad de alto riesgo (Art. Personal cobijado por*

*artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994:*

*a) Detectives:*

*i. Especializado.*

*ii. Profesional.*

*iii. Agente.*

*b) Criminalísticos:*

*i. Especializado.*

*ii. Profesional.*

*iii. Técnico.*

***c) Conductores.***

*(…)*

*2. Requisitos para ser beneficiario de la pensión de vejez por exposición a alto riesgo prevista en la L, 860/03 (Par. de Art. 2):*

*a) Personal que haya desempeñado actividad por alto riesgo (arts. 1 y 2 Dcto. 2646/94).*

*b) Cotización especial de art. 12 Dcto. 1835/94 (6% adicional (a partir de 1994 hasta 2003) a la ordinaria prevista en la L.100/93 + la especial prevista en L.860/03 (a partir de 2003 hasta la fecha)).*

*c) 650 semanas con cotización especial (continúas o discontinúas).*

*3. Requisitos de la pensión de vejez por exposición a alto riesgo (Par. 2o 3o de Art. 2):*

1. *55 años de edad.*
2. *Número mínimo de semanas contempladas en art. 33 L100/93 – 9 L. 797/03:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Número semanas** | **Año** |
| 1050 | 2005 |
| 1075 | 2006 |
| 1100 | 2007 |
| 1125 | 2008 |
| 1150 | 2009 |
| 1175 | 2010 |
| 1200 | 2011 |
| 1225 | 2012 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1250 | 2013 |
| 1275 | 2014 |
| 1300 | 2015 |

*c) Cotización especial (10% adicional a la ordinaria prevista en la L. 100/93 (a partir de 2003 hasta la fecha)). La asume en su totalidad el empleador.*

*La edad se reduce en 1 año por cada 60 semanas de cotización especial a las mínimas exigidas por la L.100/93 – L. 797/03 hasta máximo edad de 50 años.*

Ahora bien, descendiendo al caso en particular es preciso tener en cuenta que el demandante no cumple con los requisitos mínimos exigidos en la Ley 860 de 2003, pues tiene una edad de 50 años, lo que quiere decir que requiere de 1600 semanas de cotización de las cuales por lo menos 950 sean de cotización especial, y el demandante acredita solamente 1.315 semanas de cotización ordinaria, no cumpliendo con el requisito establecido en la norma.

Aunado a lo anterior conforme a la documentación que obra en el expediente, se logro determinar que el asegurado laboro para el DAS en el cargo de DETECTIVE desde el 15 de septiembre de 1992 al 31 de diciembre de 2011, equivalente a 19 años, 2 meses y 20 días, motivo por el cual se pudo determinar que no acreditaba los 20 años de servicios exclusivos con el DAS bajo el cargo de DETECTIVE, de ahí que no es procedente aplicar y reconocer el derecho bajo los postulados del Decreto 1047 de 1978.

Ahora bien en lo que respecta a acreditar 16 años de servicios y 50 años de edad resulta pertinente aclarar que si bien el demandante acreditó 16 años de servicios por el periodo comprendido desde el 15 de septiembre de 1992 y el 31 de diciembre de 2011, para el DAS en el cargo de DETECTIVE, al 31 de diciembre de 2011, el demandante contaba con 44 años de edad, por lo tanto no acreditaba el requisito de edad establecido, por lo que no era procedente el reconocimiento de la prestación conforme ala Decreto 1047 de 1978.

Ahora bien, también es preciso tener ne cuenta que la pensión especial de vejez prevista para los extrabajadores del DAS perdió su vigencia con la liquidación de dicha entidad, no siendo posible acumular las cotizaciones especiales u ordinarias efectuadas en alguna de las entidades receptoras, para efectos de cumplir con la densidad de semanas el el tiempo de servicios exigidos para el otorgamiento jurídico para la acusación del derecho

Ahora bien, respecto al tiempo laborado para la Unidad de Protección, es importante traer a colación lo dispuesto por el concepto BZ\_2016\_12472081 del 25 de octubre de 2016 de Colpensiones, mediante el cual reglamentó el reconocimiento de pensiones especiales del DAS a partir de su liquidación, expresando:

“De cara al régimen prestacional del extinto DAS, el Tribuna Constitucional de Colombia en sede de control abstracto determinó:

(…) El proceso de supresión del D.A.S. se ajustó a los preceptos constitucionales y legales, y procuró la protección de los derechos adquiridos, la estabilidad laboral y el debido proceso de los servidores en carrera cuyos cargos fueron suprimidos, a través de la incorporación a entidades afines en cargos escalafonados y de la indemnización de perjuicios, según el caso. Adicionalmente, se repite, no existe obligación para el legislador de mantener en el tiempo los beneficios de un régimen cuya vigencia se agotó con la supresión del organismo para el cual fue establecido”.

Bajo la anterior premisa, se concluye que la pensión especial de vejez prevista para los extrabajadores del DAS perdió vigencia con la liquidación de dicha entidad, no siendo posible acumular las cotizaciones especiales u ordinarias efectuadas en alguna de las entidades receptoras, para efectos de cumplir con la densidad de semanas o el tiempo de servicio exigidos por el ordenamiento jurídico para la causación del derecho.

2. Sobre la posibilidad de contabilizar los tiempos laborados en los cargos de Criminalístico Especializado, Criminalístico Profesional, Criminalístico, Técnico y Conductor para satisfacer el requisito de las 650 de cotización especial contemplado en la Ley 860, es preciso indicar que el legislador de 2003 no examinó dicha eventualidad. La norma únicamente permite acumular las cotizaciones efectuadas al amparo del Decreto 1835 de 1994, régimen que excluyó de su aro protector al personal del DAS que desempeñaba los cargos de Conductor, Técnico y Criminialistico, entre otros.

*(…)*

En síntesis, no es posible contabilizar los tiempos laborados en los cargos de Criminalístico Especializado, Criminalístico Profesional, Criminalístico, Técnico y Conductor para satisfacer el requisito de las 650 semanas de cotización especial contemplada en la Ley 860 de 2003.

**B. Conclusiones**

1. La pensión especial de vejez prevista para los extrabajadores del DAS perdió vigencia con la liquidación de dicha entidad, no siendo posible acumular las cotizaciones especiales u ordinarias efectuadas en alguna de las entidades receptoras, para efectos de cumplir con la densidad de semanas o el tiempo de servicio exigidos por el ordenamiento jurídico para la causación del derecho.

2. No es posible contabilizar los tiempos laborados en los cargos de Criminalístico Especializado, Criminalístico Profesional, Criminalístico, Técnico y Conductor para satisfacer el requisito de las 650 de cotización especial contemplado en la Ley 860 de 2003”.

Así las cosas y de acuerdo a lo expresado anteriormente, se tiene que no es dable la acumulación de tiempo cotizado con el DAS y la Unidad de Protección, concluyendo así que el accionante acredita solo 500 semanas alto riesgo, siendo como mínimo 650 semanas alto riesgo, razón por la cual no es posible reconocer la prestación a la luz de normas que regulan actividades de alto riesgo.

Ahora bien, la Dirección a fin de salvaguardar los derechos fundamentales del peticionario a elevar peticiones y al acceso a la Seguridad Social la entidad procedió a estudiar en concordancia con lo emitido en el capítulo VIII literal B de la circular Interna 15 de 2015 esta Entidad, que versa sobre las reglas de reconocimiento de la pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo, el estudio prestacional general, así:

*“(…) VIII. Reglas de aplicación general*

*(…) B. En cualquier caso, si el afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida que pretenda el reconocimiento de la pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo, tanto en el régimen general previsto en el Decreto 2090 de 2003 como en cualquiera de los especiales analizados en precedencia, NO reúne los requisitos para acceder a dicha pretensión, tendrá derecho a que su solicitud prestacional sea estudiada con las reglas generales propias del Sistema General de Pensiones y al reconocimiento de la pensión de vejez que le corresponda, con base en la norma de la que llegue a ser beneficiario(…)”*

Así mismo, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, establece el Régimen de Transición para las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley en mención acrediten 35 o más años de edad en el caso de las mujeres y 40 o más años de edad en el caso de los hombres, o más de 15 años de servicio, permitiendo aplicar la edad para pensionarse, el número de semanas o tiempo cotizado y el monto pensional del régimen anterior al que venía afiliados.

Teniendo en cuenta lo anterior, el accionante al 01 de abril de 1994 (Entrada en vigencia de la Ley 100) no

acredita 15 años de servicio toda vez que en la historia laboral registra un total de 525 semanas (10 años, 2 meses y 12 días), y tampoco contaba con más de 40 años de edad (hombre), razón por la cual NO es beneficiario del régimen de transición.

Ahora bien, no habiéndose cumplido con los requisitos del régimen de transición, la entidad estudió la prestación pensional a la luz de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, se señalan como requisitos para acceder a la pensión de vejez:

*Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:*

*“(…)*

*1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.*

*A partir del 1° de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.*

*2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.”* (Cursiva fuera de texto)

A partir del 1° de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015, así:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **SEMANAS**  **MÍNIMAS** | **EDAD**  **MUJERES** | **EDAD**  **HOMBRES** |
| 2005 | 1050 | 55 | 60 |
| 2006 | 1075 | 55 | 60 |
| 2007 | 1100 | 55 | 60 |
| 2008 | 1125 | 55 | 60 |
| 2009 | 1150 | 55 | 60 |
| 2010 | 1175 | 55 | 60 |
| 2011 | 1200 | 55 | 60 |
| 2012 | 1225 | 55 | 60 |
| 2013 | 1250 | 55 | 60 |
| 2014 | 1275 | 57 | 62 |
| 2015 | 1300 | 57 | 62 |

En consideración a lo anterior si bien el demandante logra acreditar el requisito mínimo de 1300 semanas, al contar con 1780 semanas cotizadas, no logra acreditar el requisito mínimo de edad, que para el año 2019 es de 62 años, teniendo únicamente 58 años, razón por la cual no tiene derecho con base en la anterior disposición normativa.

**CASO CONCRETO**

Tenemos que el demandante señor FREYRE GARCIA BOLIVAR JESUS, pretende que la Administradora Colombiana de Pensiones le reconozca y pague una pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo a partir del 2 de mayo de 2017, fecha en que cumplió el status de pensionado, junto con el pago de retroactivo. Así mismo determinar si procede la inclusión del factor salarial denominado prima de riesgo.

No obstante, lo anterior, las súplicas invocadas en la demanda no tienen vocación de prosperidad, esto con base en las siguientes consideraciones:

Para empezar, debemos resaltar que mediante resolución SUB 107164 del 27 de junio de 2017, la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-, negó el reconocimiento y pago de una pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo y el reconocimiento y pago de una pensión de vejez ordinaria al hoy accionante, por no acreditar los requisitos legales dispuestos en el decreto 1047 de 1978 ni en la ley 797 de 2003.

Posteriormente a través de los actos administrativos SUB 21196 del 29 de septiembre de 2017 y DIR 17889 del 13 de octubre de 2017, se negó el reconocimiento de la pensión especial de vejez por actividades del alto riesgo, por no cumplir los requisitos legales para acceder al derecho invocado.

Ahora bien, el señor **FREYRE GARCIA BOLIVAR JESUS**, no cumple con los requisitos mínimos exigidos en la Ley 860 de 2003, pues tiene una edad de 50 años, lo que quiere decir que requiere de 1600 semanas de cotización de las cuales por lo menos 950 sean de cotización especial, y el demandante acredita solamente 1.315 semanas de cotización ordinaria, no cumpliendo con el requisito establecido en la norma.

Aunado a lo anterior conforme a la documentación que obra en el expediente, se logro determinar que el asegurado laboro para el DAS en el cargo de DETECTIVE desde el 15 de septiembre de 1992 al 31 de diciembre de 2011, equivalente a 19 años, 2 meses y 20 días, motivo por el cual se pudo determinar que no acreditaba los 20 años de servicios exclusivos con el DAS bajo el cargo de DETECTIVE, de ahí que no es procedente aplicar y reconocer el derecho bajo los postulados del Decreto 1047 de 1978.

Ahora bien en lo que respecta a acreditar 16 años de servicios y 50 años de edad resulta pertinente aclarar que si bien el demandante acreditó 16 años de servicios por el periodo comprendido desde el 15 de septiembre de 1992 y el 31 de diciembre de 2011, para el DAS en el cargo de DETECTIVE, al 31 de diciembre de 2011, el demandante contaba con 44 años de edad, por lo tanto no acreditaba el requisito de edad establecido, por lo que no era procedente el reconocimiento de la prestación conforme ala Decreto 1047 de 1978.

Por otro lado, el accionante al 01 de abril de 1994 (Entrada en vigencia de la Ley 100) no acredita 15 años de servicio toda vez que en la historia laboral registra un total de 525 semanas (10 años, 2 meses y 12 días), y tampoco contaba con más de 40 años de edad (hombre), razón por la cual NO es beneficiario del régimen de transición.

Finalmente, la prestación pensional fue estudiada a la luz de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, concluyéndose que si bien el demandante logra acreditar el requisito mínimo de 1300 semanas, al contar con 1780 semanas cotizadas, no logra acreditar el requisito mínimo de edad, que para el año 2019 es de 62 años, teniendo únicamente 58 años, razón por la cual no tiene derecho con base en la anterior disposición normativa.

Por lo anterior, al no haber lugar a la pretensión principal que es la encaminada al reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo, tampoco hay lugar al retroactivo pensional, ni al factor salarial denominado prima de riesgo.

**EXCEPCIONES DE MÉRITO**

Con el debido respeto formulo las siguientes excepciones a la demanda formulada:

**PRIMERA: INEXISTENCIA DEL DERECHO RECLAMADO A CARGO DE COLPENSIONES**

La presente se fundamenta en que no es posible reconocer la pensión de vejez por actividad de alto riesgo, teniendo en cuenta que el demandante no cumple con los requisitos mínimos exigidos en la Ley 860 de 2003, pues tiene una edad de 50 años, lo que quiere decir que requiere de 1600 semanas de cotización de las cuales por lo menos 950 sean de cotización especial, y el demandante acredita solamente 1.315 semanas de cotización ordinaria, no cumpliendo con el requisito establecido en la norma.

Aunado a lo anterior conforme a la documentación que obra en el expediente, se logro determinar que el asegurado laboro para el DAS en el cargo de DETECTIVE desde el 15 de septiembre de 1992 al 31 de diciembre de 2011, equivalente a 19 años, 2 meses y 20 días, motivo por el cual se pudo determinar que no acreditaba los 20 años de servicios exclusivos con el DAS bajo el cargo de DETECTIVE, de ahí que no es procedente aplicar y reconocer el derecho bajo los postulados del Decreto 1047 de 1978.

Ahora bien en lo que respecta a acreditar 16 años de servicios y 50 años de edad resulta pertinente aclarar que si bien el demandante acreditó 16 años de servicios por el periodo comprendido desde el 15 de septiembre de 1992 y el 31 de diciembre de 2011, para el DAS en el cargo de DETECTIVE, al 31 de diciembre de 2011, el demandante contaba con 44 años de edad, por lo tanto no acreditaba el requisito de edad establecido, por lo que no era procedente el reconocimiento de la prestación conforme a la Decreto 1047 de 1978.

**SEGUNDA: COBRO DE LO NO DEBIDO**

La administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, como administrador del Régimen de Prima Media, al reconocer y/o negar una pensión, lo realiza con fundamento en la normatividad vigente y de acuerdo con los principios generales de favorabilidad en edad, tiempo de servicios o semanas de cotizaciones y monto pensional, por tanto, cuando el ejecutante, sin asidero jurídico o fáctico, reclama una prestación distinta incurre en un cobro de lo no debido.

Se resalta que no es dable la acumulación de tiempo cotizado con el DAS y la Unidad de Protección, concluyendo así que el accionante acredita solo 500 semanas alto riesgo, siendo como mínimo 650 semanas alto riesgo, razón por la cual no es posible reconocer la prestación a la luz de normas que regulan actividades de alto riesgo.

**TERCERA: PRESCRIPCIÓN**

La presente excepción de prescripción se propone, sin que con ello se reconozca derecho alguno al demandante. Se propone prescripción sobre cualquier derecho que eventualmente se hubiere causado a favor del demandante, de conformidad con las normas legales, sobre las reclamaciones aducidas por la parte actora.

**CUARTA: BUENA FE**

COLPENSIONES en todas sus actuaciones tiene que someterse al imperio de la constitución Nacional y de la Ley, conforme lo prescriben entre otros los Artículos 121, 122 y 128 de la Carta Política, siendo esto lo que ha acatado hasta el momento.

Al respecto la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

*“Como principio general del derecho, (la buena fe) ha sido reconocido por la jurisprudencia colombiana especialmente desde 1935, citándose la jurisprudencia y doctrina francesa y sobre todo el artículo 1603 del Código Civil Colombiano: "Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella". Norma que tiene su correspondencia*

*en numerosos artículos del Código Civil y que en la década del treinta también tendrá en Colombia importante tratamiento doctrinal: "De ahí que se hable de la buena fe como de un criterio primordial en la interpretación de las convenciones, gracias al cual el juez puede sacar triunfante la equidad sobre los rigores del formalismo".*

*“El principio de la buena fe es también principio del derecho laboral, ha sido incluido en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 55 y aparece en la jurisprudencia laboral desde la época del Tribunal Supremo del Trabajo: "El principio de la buena fe, que no es nuevo sino que data de las mejores tradiciones romanas, debe presidir la ejecución de los contratos, incluido el de trabajo". Sentencia ésta proferida el 9 de febrero de 1949 y que llega hasta analizar no solo la buena fe sino la mala fe, en los siguientes términos:”*

*"La mala fe –ha dicho la Corte Suprema de Justicia- debe ser la deducción acertada hecha sobre la plena comprobación de hechos precisos de naturaleza incompatible con la bona fide, como lo sería, en tratándose de la buena fe contractual, la demostración evidente de una visible ventaja pecuniaria en una negociación celebrada con un incapaz, que mostrara un aprovechamiento inhonesto del estado de inferioridad en que ocurrió una de las partes a su celebración, es decir, la prueba de que se abusó de un estado de debilidad para obtener un indebido e injusto provecho, apreciable en el desequilibrio de los valores. Sin olvidar tampoco que la calificación de la fe*

*jurídica, el rigor con que se exige o es exigible buena fe en los negocios de hecho, conformada probatoriamente y adoptada en las situaciones de cada caso"*

Según lo anterior, la buena fe en la labor misional de COLPENSIONES surge precisamente de la estricta aplicación de la Constitución, la Ley y el precedente jurisprudencial que permite conceder o negar prestaciones ajustadas a derecho, por lo cual, existiendo la presunción de legalidad del acto que garantiza seguridad jurídica en la decisión prestacional, tal circunstancia permite revestir además bajo la égida de la buena fe el reconocimiento o negación pensional por lo que es de carga exclusiva del demandante controvertir tanto la presunción legal del acto como la buena fe en la decisión.

**QUINTA: GENÉRICA O INNOMINADA**

De manera respetuosa se presenta esta excepción con el fin de que se aplique cuando se demuestre cualquier medio de defensa a favor de la entidad demandada, en ese sentido se declaren las demás excepciones que resulten dentro del procesos.

**PRUEBAS**

* Las solicitadas por la actora son conducentes para el proceso, pero no otorgan nuevos juicios de valor que sean suficientes como para que el señor(a) juez efectúe declaración o condena alguna en contra de mi defendida.
* Expediente Administrativo de la demándate e Historia Laboral: <https://drive.google.com/drive/folders/1M9822N6jDOqf1PSjNyWEXIpIaq8_gSe4?usp=sharing>

**ANEXOS**

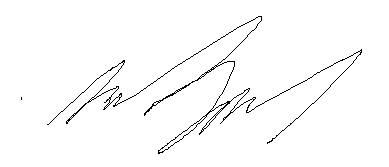
1. Poder General debidamente otorgado por la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones a la firma Conciliatus S.A.S., representada legalmente por el Dr. JOSE OCTAVIO ZULUAGA RODRÍGUEZ.
2. Poder de sustitución debidamente otorgado por el Abogado JOSE OCTAVIO ZULUAGA RODRIGUEZ.
3. Expediente administrativo e historia laboral

**NOTIFICACIONES**

Para efectos de notificaciones se pueden surtir en:

* El suscrito en la Calle 26 A # 13-97 Torre de oficinas Bulevar Tequendama, Oficina 702
* Correo electrónico: abaez.conciliatus@gmail.com
* Celular 300 3687176

Atentamente,



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALEJANDRO BAEZ ATEHORTUA**

C.C. 1.019.038.607 de Bogotá D.C.

T.P. 251.830 del C.S. de la J.

1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Expediente 13001-23-33-000-2013-00022-01, actor: José Francisco Guerrero. Demandada UGPP. Providencia de 7 de abril de 2016. [↑](#footnote-ref-1)